

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 2 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por Juan Arreola, José María Rosales y Tomas Montelongo, contra el Gefe político de la Capital del Estado, por haberlos juzgado como salteadores aplicándoles las leyes de 18 de Mayo de 1871, 23 del mismo mes de 1872 y 19 de Mayo de 1873, con violacion, segun manifiestan, de la garantía que consigna el artículo 14 de la Constitucion federal en la parte que dispone: que nadie puede ser juzgado sino por leyes exactamente aplicables al hecho en cuestion; y considerando: que está plenamente comprobado que los quejosos han cometido varios robos con asalto en cuadrilla y en despoblado, delitos á los que son exactamente aplicables las leyes de suspension de garantías que se han expedido contra salteadores y plagiarios, por cuyo motivo no ha habido violacion de la garantía invocada al ser juzgados conforme á sus disposiciones.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 22 de Noviembre del año pasado, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Juan Arreola, José María Rosales y Tomas Montelongo, contra los procedimientos del C. Gefe político de Durango que los juzgó como salteadores.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*

—*José Artega.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 4 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interno.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Hidalgo por el C. Francisco de Asis Osorio, contra la Seccion instructora del gran jurado de la Legislatura del Estado, por haber comenzado á instruirle causa con motivo de la acusacion presentada contra él, de haber atacado la soberanía y forma de gobierno del mismo Estado, y extra-limitado sus facultades constitucionales y legales, con el hecho de haber solicitado del Gobierno general, con el caracter de Gobernador sustituto, que declarára á Hidalgo en estado de sitio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: cuando el C. Presidente interino constitucional de la República, expide, investido de facultades extraordinarias, la ley de amnistía, y como una reconciliacion para los mexicanos perdonando los delitos políticos, el C. Lic. Francisco de Asis Osorio, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de este Estado y ex-comandante militar, recurre ante la justicia federal pidiendo se le ampare y proteja contra los actos de la Seccion instructora del gran jurado de esta H. Legislatura, por violarse con ellos las garantías individuales

de que goza, segun el artículo 14 de la Constitucion general.

El Promotor, despues del estudio que ha hecho al escrito de acusacion (fojas 13,) deduce: que el delito por el que se pide la declaracion de culpabilidad en el C. Lic. Francisco de Asis Osorio, es por haber solicitado del Ejecutivo de la Union á mediados de Enero próximo pasado, la declaracion en estado de sitio de esta parte integrante de la República.

Esta peticion mereceria el nombre de delito, si la constitucion particular del Estado ó la general lo declararan así; pero en ninguna de las dos está definido que cuando los CC. pidan la declaracion de sitio de cualquiera de los Estados, se les tenga como á criminales, ni mucho menos que por solo este acto se de accion popular.

Conocidas como fueron las circunstancias críticas por las que estaba pasando el Estado antes de que fuera declarado en sitio, el haber pedido esto, fué cumplir el C. Lic. Osorio, con la fraccion 6ª del artículo 62 de la constitucion particular, pues falta de elementos el Gobierno del Estado y sin que se pudiera hacer frente á la situacion, exitó á los poderes de la Union para que con la declaracion del estado de sitio, se pudiera salvar este; además, si el quejoso extralimitó sus facultades constitucionales y legales, la responsabilidad deberá exigirse ante el gran jurado nacional, único Tribunal competente para juzgar á los funcionarios federales, como lo era en ese tiempo el C. Lic. Francisco de Asis Osorio.

El informe que rindió la H. Legislatura del Estado mas extenso que la misma acusacion del C. José María Arteaga, confirma lo que ha expuesto el suscrito, á saber, que se acusa al C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por haber pedido al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el estado de sitio, y además, por haber mandado publicar el decreto de 28 de Enero último, sin dar aviso á la diputacion permanente, omitiendo tambien la firma del secre-

tario del ramo. Lo primero, como está visto, no constituye un delito, por que el derecho de pedir es inviolable, segun el artículo 8º de la Constitucion general; y lo segundo, si lo es, toca su conocimiento al gran jurado nacional, supuesto que cuando se publicó ya era el solicitante Comandante militar, y de consiguiente sujeto á jurisdiccion superior.

Esta breve exposicion fundada en el artículo 8º de la carta fundamental de la República, y en los artículos 101 fraccion 3ª y 102 de la misma carta política, hace pedir al Fiscal se ampare y proteja al C. Lic. Francisco de Asis Osorio, contra los actos de la seccion instructora del gran jurado, que le vulnera las garantías individuales de que ha hecho mérito.

Pachuca, Agosto de 1872. (firmado)—
M. Sanchez.

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 1º de 1873.—*J. Briseño.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El suscrito Promotor en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Francisco de Asis Osorio, contra la seccion instructora del gran jurado de este Estado, ante V. como mejor proceda y en términos de alegar de buena prueba, dice: que por haberse violado en la persona del solicitante las garantías consignadas en el artículo 14 de la Constitucion general, el juzgado se ha de servir fallar de conformidad con lo pedido por el quejoso.

En el cuaderno principal á fojas 13, consta que el C. José María Arteaga acusó al C. Francisco de Asis Osorio ante la H. Legislatura, por que estando desempeñando este el Gobierno del Estado en ausencia del Gobernador constitucional, pidió á mediados del año de 1872, al C. Presidente de la República, se declarase en estado de sitio esta parte federativa, con lo que se atacó

su soberanía, y por haber extralimitado durante su gobierno militar, sus facultades constitucionales y legales.

El quejoso funda su ocurno relativo, en el artículo 14 ya citado, que asegura esta garantía: "No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicables á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley." Por el sentido de este artículo y por el cargo que desempeñaba el C. Lic. Osorio, en la época en que el Ejecutivo de la Union se hallaba investido de facultades extraordinarias, se comprende la infraccion del precepto citado.

El solicitante no puede ser reo por haber pedido el estado de sitio, por que el derecho de peticion lo garantiza el artículo 8º de nuestra carta fundamental. No lo puede ser igualmente ante este Congreso, por haber extralimitado sus facultades constitucionales y legales, por que siendo Comandante militar del Estado durante el estado de sitio, sus actos no estaban sometidos á la jurisdiccion de la Legislatura, pues las autoridades constitucionales de este lugar cesaron de funcionar en todo ese tiempo en que el Gobierno Supremo gobernaba por medio de sus funcionarios. Esto supuesto, y habiendo tenido el C. Francisco Osorio, en el tiempo á que se contrae la acusacion, el caracter de empleado federal, el tribunal competente para conocer de los supuestos delitos, lo es el gran jurado nacional.

Por todas estas razones que son de gran peso, por haberlas tenido en consideracion la Suprema Corte de Justicia al pronunciar su fallo de 21 de Abril del corriente año, y fundado en el artículo 101 fraccion 3ª de la Constitucion general, el Promotor fiscal pide al juzgado de Distrito, que la Justicia federal ampare y proteja al C. Lic. Francisco de Asis Osorio, contra la seccion instructora del gran jurado de este Estado.

Pachuca, Junio 17 de 1873. (firmado)
—*Macedonio Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 1º de 1873.—*J. Briseño.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Junio 24 de 1873.—Visto este juicio promovido por el C. Francisco de A. Osorio, contra la seccion instructora del gran jurado del Congreso del Estado, que le estaba juzgando por haber atacado la soberanía y forma del Gobierno del Estado y por haber extralimitado sus facultades constitucionales y legales, con el hecho de haber solicitado la declaracion en estado de sitio del propio Estado, y servido la comandancia militar en esta época. Visto el escrito en que el quejoso señala como violadas con aquel procedimiento, las garantías que otorga la Carta federal en su artículo 14.

Considerando; primero: que segun el informe de la autoridad responsable (fojas 11), los delitos consisten, primero: en haber solicitado del Gobierno general la declaracion del Estado en estado de sitio, y segundo: en varios otros actos ejercidos en virtud del nombramiento que se le confirió de Gobernador y Comandante militar.

Segundo: que no habiendo como no hay ley alguna penal que prohiba hacer aquella solicitud, y sí estando garantizado el derecho de peticion por el artículo 8º de la Constitucion general, es inconcuso que los procedimientos del gran jurado violan en la persona del quejoso el artículo 14 de la propia Constitucion, en la parte en que establece: que nadie puede ser juzgado sino por leyes exactamente aplicables al caso, no menos que el 16 de la misma en que se manda: que nadie puede ser molestado en su persona sin causa legal.

Tercero: que la Constitucion del Estado solo concede al gran jurado la facultad de procesar á los funcionarios constitucionales de que habla su artículo 104, y el C. Osorio no fué empleado constitucional del propio Estado, sino de la Federacion; y que en

esta virtud la seccion instructora del gran jurado del Congreso, no es competente para juzgar al quejoso, sino infringiendo el artículo 14 citado, en cuanto dispone que nadie sea juzgado sino por el tribunal establecido previamente por la ley.

Por tales consideraciones, y con fundamento del artículo 1º fraccion 1ª de la Constitucion, se decreta: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Francisco de A. Osorio contra los procedimientos de la seccion instructora del Congreso del Estado, que lo comenzó á juzgar por los delitos de que se ha hecho mencion, porque con ellos se violan en la persona del quejoso las garantías que otorga el Código fundamental de la República en su artículo 14. Hágase saber; exíjase la reposición del papel sellado; publíquese; compúlsense las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para la revision de esta sentencia, que pronunció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fé.—*Miguel Mejía.*—*Francisco Briseño.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Pachuca, 27 de Junio de 1873.—*Francisco Briseño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por el C. Francisco de Asis Osorio, contra la seccion instructora del gran jurado de la Legislatura del Estado, por haber comenzado á instruirle la causa con motivo de la acusacion presentada contra él, de haber atacado la soberanía y forma del Gobierno del mismo Estado y extralimitado sus facultades constitucionales y legales, con el hecho de habersolicitado del Gobierno general, con el carácter de Gobernador sustituto, que declarara

á Hidalgo en estado de sitio; con cuyo procedimiento se violan en concepto del quejoso, las garantías que otorga el artículo 14 de la Constitucion federal.

Considerando: que la Legislatura al admitir la acusacion, y la seccion instructora al proceder contra el C. Osorio, se han sujetado en todo á las prescripciones de los artículos 1º, 2º, 5º, 25, 58, 62 y 66 de la Constitucion particular del Estado, que determinan las facultades y obligaciones del Gobernador, así como al 106 que dispone: que el Congreso conocerá como jurado de acusacion, de los delitos oficiales del Gefe del poder Ejecutivo, y el Tribunal Superior como jurado de sentencia.

Que en nada altera la competencia de la Legislatura de Hidalgo para conocer con e carácter de jurado de acusacion, del hecho que ha motivado la formacion de causa; la simple suposicion del quejoso, de que en el caso de haber habido culpa por su parte en solicitar el estado de sitio, tambien la hubo por parte del Gobierno general en decretarlo, y que entonces el jurado nacional y no el particular del Estado, sería el único competente para conocer del delito y para juzgarle á el mismo, pues que prescindiendo de que el Gobierno de la Union en virtud de las facultades extraordinarias de que estaba investido, pudo hacer tal declaracion, siempre quedaría expedita la jurisdiccion particular del Estado para proceder contra el C. Osorio, por no existir ninguna disposicion que restrinja el libre ejercicio de sus funciones á los tribunales de los Estados, sobre aquellos actos que constituyen una infraccion de las leyes de estos, solo por la circunstancia de que el delito pudiera estar tambien castigado por las leyes de la Union ó por que alguno de los rcos gozara de fuero federal.

Que por los motivos indicados, no aparece que la seccion del gran jurado de la Legislatura de Hidalgo haya violado en ningun sentido el artículo 14 de la Constitucion de la República, al proceder á la for-

macion de causa; y con fundamento del artículo 101 de la misma Constitucion, se decreta: Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 24 de Junio del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal. Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco de Asis Osorio, contra los procedimientos de la seccion instructora del Congreso del Estado de Hidalgo erigido en jurado, que ha comenzado á instruirle causa por ataques á la soberanía del mismo Estado y extralimitacion de facultades.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 6 de 1878.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida, en el Juzgado de Distrito del Estado de Michoacan, contra el Lic. D. Gabriel Plancarte, por ultrajes á los agentes de fisco federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Instruida la presente causa contra el Lic. Gabriel Plancarte por faltas cometidas

á los empleados de la federacion, se le hicieron por el C. Juez de 1ª instancia de Zamora los cargos que formuló este Ministerio en su pedimento de 9 de Enero último.

Durante el plenario, no desvaneció tales cargos el reo, con prueba de ninguna especie, y ni podía hacerlo, supuesto que el delito está plenamente justificado en el sumario con su propia confesion y con el testimonio de varios testigos presenciales.

Las razones que alegó en su defensa no satisfacen en manera alguna, y dejan del todo subsistente la criminalidad del proceso.

En virtud de esto, el Promotor fiscal pide se aplique á D. Gabriel Plancarte la pena que demarca el Código penal en el título 8º capitulo 10 artículo 911, temiendo en cuenta ademas, la circunstancia agravante de que habla la fraccion 7ª del artículo 44 capitulo 5º del mismo Código, pues segun aparece en la causa, es letrado el reo de que se trata.

Ademas; como segun consta del proceso, el mismo D. Gabriel Plancarte vertió especies altamente injuriosas contra algunos funcionarios del Estado, este Ministerio pide se sirva decretar se compulse testimonio de lo conducente y se remita al Supremo Tribunal de Justicia, para lo que estime conveniente disponer, en vista de tales circunstancias, contra el propio reo.

I por cuanto á que este presentó su escrito de defensa en papel comun debiendo haberlo hecho en el sellado correspondiente, y el secretario del Juzgado 2º de Letras de Zamora dió cuenta con tal escrito al Juez instructor, y este le dió curso contra lo expresamente mandado en la ley general de 14 de Febrero de 1856, el Promotor fiscal pide se mande que el reo reponga aquel papel con el sellado que corresponde, y se imponga al Juez 2º de Letras de Zamora y su secretario, las penas en que han incurrido segun lo dispuesto en los artículos 55 y 57 de la ley citada.

Concluye el Promotor manifestando que